

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 18 de 1873. *Lic Enrique Landa,* oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el Lic. Próspero O. Vega, contra el cobro de contribuciones á varios vecinos de Querétaro.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Próspero O. Vega en uso de los poderes que ha exhibido, conferidos por setenta y un vecinos del Estado, ha interpuesto el recurso de amparo contra el acto de exigírseles contribuciones por la Recaudación principal respectiva y la Tesorería Municipal. Funda su pretension, en que carecen de poder público los que las han impuesto y los que las recaudan.

Los decretos de 24 de Febrero y de 29 de Marzo del año corriente, en virtud de los cuales se cobran esos impuestos, han sido expedidos, el uno por el Ejecutivo del Estado con autorizacion de la Legislatura, el otro por esta misma; pero como ni la

una ni la otra son autoridades legítimas, sino realmente usurpadoras del poder público, les falta el carácter de ley á las disposiciones referidas, y el de *autoridad competente* á los que pretenden cumplirlas, al decir de los quejosos. Comparando estos lo expuesto, con los artículos 16 y 101 de la Constitucion, resulta en su concepto, que las leyes de contribuciones á que aluden, se han expedido por *autoridades incompetentes*, y violando por lo mismo el referido artículo 16, habiendo lugar en consecuencia, al amparo respectivo.

La Legislatura actual se instaló sin *quorum*, y el artículo 41 de la Constitucion del Estado dice: que "el Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de mas de la mitad del número total de sus miembros." En consecuencia, todos sus actos son nulos.

El coronel Don Julio M. Cervantes no puede ser Gobernador del Estado, porque se lo prohiben los artículos 77 y 80 de la Constitucion local, aparte de proceder su eleccion de la nula Legislatura.

"Una vez impuesta á los Estados la forma de gobierno representativo popular, y consistiendo esta esencialmente en que las autoridades de cada Estado sean nombradas como se previene en su respectiva Constitucion, que nunca puede ser contraria á la federal;" es consecuente que los funcionarios de Querétaro debieron ser electos en la forma constitucional.

Una infraccion de la Constitucion particular de un Estado en esta materia, importa por lo mismo la infraccion de la Constitucion Federal.

Sea de esto lo que fuere, desde luego se palpan los inconvenientes que resultan de sustrair á un individuo de la accion de un Gobierno de *facto*, dejando á este subsistente. Semejante proceder convierte al amparado en privilegiado respecto de los demás que continúan sujetos á la obediencia de la administracion de hecho, dejando de ser la igualdad la gran ley en la República,

como nos lo anuncia el preámbulo de la Constitución, cuyo artículo 12 abolió las prerogativas, á la vez que el 28 prohibió los privilegios. Desorganiza al Gobierno sin sustituirlo con otro, declarando al pueblo en acefalía sin convocarlo á comicios para hacerla cesar.

¿Y como sin un Gobierno, cualesquiera que sea, se observarán y harán observar los principios que son el objeto y base fundamental de las sociedades políticas? ¿Como los miembros de que se compone cada una de estas sociedades podrán obrar, sin perjudicarse recíprocamente? Si los hombres no fuesen mas que meras inteligencias, no hay duda que la religion, la filosofía y la moral bastarian para regirles; pero no siendo así, es físicamente imposible que estén unidos y sean administrados, sino es por ese poder regulador que se llama Gobierno. De aquí la necesidad de sustituirlo desde el momento en que carece de la fuerza moral indispensable para que sus resoluciones sean obedecidas.

Por esto, cuando el artículo 101 de la Constitución encomienda á los jueces federales la guarda de los derechos del hombre, caso de ser atacados por una autoridad cualquiera; á la vez que el 102 determina que no se hagan declaraciones generales en las sentencias que con ese objeto se pronuncien, es preciso convenir en que los Legisladores de 57 quisieron evitar las consecuencias funestas de un desquiciamiento general en el orden establecido para cada fraccion social; ó bien un conflicto entre las autoridades federales y las de un Estado, poniéndolas frente á frente; imitando en esto las sabias instituciones de la Nacion vecina.

“En poder de los siete jueces federales, dice Toqueville, están reposando incesantemente la paz, la prosperidad y hasta la existencia de la Union. Sin ellos, la Constitución es una obra muerta: á ellos acude el poder ejecutivo para oponerse á los desafueros del cuerpo legislativo; la legislatura para defenderse de las empresas del Poder

Ejecutivo; la Union para hacerse obedecer de los Estados; los Estados para reherir las pretensiones exajeradas de la Union; el interés público contra el interés privado; el espíritu de conservacion contra la inestabilidad democrática. Su poder es inmenso, pero es un poder de opinion: son todopoderosos en tanto que el pueblo consiente en obedecer la ley, y nada pueden al punto que la desprecia. Y bien: la potestad de opinion es la de que es mas difícil servirse, porque es imposible decir exactamente en donde están sus límites, siendo las mas veces tan peligroso traspasarlos como no llegar hasta ellos.” “Los jueces federales no solo deben ser buenos ciudadanos, sujetos instruidos y pundonorosos, cualidades necesarias á todo magistrado, sino que se necesita tambien sean estadistas: es menester que sepan discernir el espíritu de su tiempo arrostrar los obstáculos vencibles y desviarse de la corriente, cuando la oleada amaga el llevarse consigo la soberanía de la Union y la obediencia debida á sus leyes.”

Estas consideraciones son bastantes para probar lo complejo de la cuestion que bajo la forma de amparo por violacion de garantías individuales, se presenta al examen y decision de los jueces federales: porque necesita de una previa declaracion general prohibida por el artículo 102 ya citado, para venir por medio de inducciones á la consecuencia de que los quejosos no están obligados á obedecer las órdenes de los que en Querétaro ocupan el lugar de legítimas autoridades. En efecto: se necesita declarar previamente que la Legislatura no tiene el poder legislativo y que el coronel D. Julio M. Cervantes no es propiamente Gobernador del Estado, para inferir de aquí, que los que han interpuesto este recurso no deben pagar las contribuciones decretadas por aquella y exigidas por los agentes de este.

Con todo, si en vez de engolfarnos en difíciles y abstractas cuestiones de soberanía y organizacion de poder público, nos atenc-

mos á los principios constitucionales dándoles su natural y genuina interpretacion, desaparecerán inmediatamente los inconvenientes de una sentencia, cuyo resultado sería la suspension de las garantías individuales para todos los vecinos del Estado, al poner en evidencia la ilegalidad de sus autoridades sin sustituirlas con las legales, la destruccion de la igualdad social y la paralización de las entradas que corresponden al fisco federal.

En efecto: cuando el artículo 16 de la Constitución exige el mandamiento de autoridad competente para proceder á embargar á un individuo, no hace relacion al origen de esa autoridad, sino á la naturaleza de las funciones que ejerce; es decir, quiere que un mandamiento judicial no venga de autoridad administrativa, ni de cuerpo legislativo, ni que una ley venga del ejecutivo, ni un procedimiento administrativo se ordene por los otros poderes. No es posible calificar la competencia ó incompetencia de una autoridad sin que esta exista. Los que la usurpan no son competentes ni incompetentes, sino simplemente personas delincuentes que se la arrogan. Ser incompetente es no ser competente. Ser autoridad incompetente es ser autoridad no competente; y por lo mismo, el que no ejerce autoridad no puede ser autoridad competente ni incompetente. El mandamiento de embargo que motiva esta queja y los decretos en que se funda aquel, dimanar de personas incompetentes, mas no de autoridades, porque no lo son. Y el artículo 16 de la Constitución no garantiza á los ciudadanos que no sean molestados por personas incompetentes; pues para ello serian indispensables medios preventivos que por lo comun están fuera del alcance de los gobiernos; y para obtener la reparacion debida en ese caso, están instituidos los tribunales ordinarios; sino que solamente los preserva de toda molestia que no sea mandada por escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedi-

miento. Así es que esta prescripcion se refiere á las autoridades legítimamente establecidas para conocer de ciertos y determinados asuntos, y "no á las autoridades permanentes de hecho, que no tienen poder alguno natural ni conferido, cuya competencia es nula."

No obsta que pretendan ser legítimas ni que cuenten con los elementos y recursos de la autoridad; pues estos accidentes no modifican la situacion en que se hayan colocado haciéndose responsables del delito de "arrogarse el poder público de un Estado." Y esta interpretacion del artículo constitucional, entendiendo por autoridades á las que lo son de derecho y no á las que son simplemente de hecho, no hace á estas de mejor condicion que á aquellas; pues que contra ellas cabe el procedimiento directo criminal, al ser clasificadas de usurpadoras. En equipararlas á las autoridades legítimas admitiendo contra ellas el recurso de amparo, se hacen de igual condicion.

Una sentencia de amparo no debe ser mas que un silogismo, cuya mayor es el hecho, la menor la garantía violada por la autoridad y el fallo la consecuencia. Cuando así se verifica, se hace simplemente la aplicacion de la ley, que no puede negarse, al hecho probado, y se cumple con lo prevenido en el artículo 102 de la Constitución. Cuando admitida la mayor se niega la menor porque no se percibe desde luego su certeza, tiene esta que determinarse, necesitándose al efecto un nuevo silogismo. Así hay en este caso un juicio previo para determinar la menor, que es una proposicion general, contra el tenor del artículo 102.

En vez de seguir este método inductivo, peligroso cuando solo se trata de la simple aplicacion de la ley á un caso dado; es preferible adoptar el procedimiento directo, para el cual basta el siguiente raciocinio. Los CC. C. D. H. y S. M. se han arrogado el poder público; los que se arrogan el poder público, son acreedores á cuatro años de confinamiento (artículo quinto de la ley de

6 de Diciembre de 1856): luego C. D. H. y S. M. son acreedores á cuatro años de confinamiento. He aquí un silogismo cuya mayor es el hecho que debe probarse, y la menor la ley que no puede negarse; siendo la consecuencia precisa si se prueba la mayor. Y es de notarse que de esta misma premisa se pretende inferir la consecuencia del amparo.

Es indispensable distinguir los derechos inalineables del hombre, de los del ciudadano, las garantías individuales de los derechos políticos; y fijarse en que para preservar las primeras de toda arbitrariedad se han introducido recursos como el presente. Cuando se despoja á un ciudadano de su propiedad, del fruto de su industria, de su libertad, ó se ataca á su seguridad personal, se viola una garantía: cuando se falsea el voto de un pueblo ó se le arrebatara, se violan derechos políticos, cuya proteccion no está encomendada por el artículo 101 de la Constitucion á los jueces federales.

Es asimismo necesario que se conserve en nuestra Constitucion, ese caracter de sencillez que tiene de comun con la naturaleza y la verdad; que hace sensible á todos la introduccion del primer abuso, que ella misma repele, como las sustancias puras que rehusan mezclarse con cuerpos heterogéneos y groseros. Así tendremos la ventaja de unir á una evidente teoría, el ejemplo de todo tiempo para probar cuanto sufre la libertad cuando se introduce la confusion en los poderes públicos; esforzándonos para preservar á nuestra instituciones, del desarrollo de un gérmen funesto.

Por lo expuesto, el Promotor fiscal pide, 1º: se sirva V. negar el amparo solicitado; 2º: que con las pruebas que ministran los quejosos, y sacándose testimonio de este expediente, proceda por cuerda separada á formar la averiguacion correspondiente, contra los que resulte que se hayan arrogado el poder público del Estado.

Querétaro, 31 de Diciembre de 1872.

*Luis Castañeda.*

TOMO IV.—PARTE II.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Querétaro, Febrero 6 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Próspero C. Vega en nombre y representación de los causantes de contribuciones, que en el poder por ellos otorgado se expresa, contra los efectos de las leyes de hacienda del Estado de 24 de Febrero y 29 de Mayo del año próximo pasado, interponiendo este recurso á virtud de reputar violada la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion general, al ser expedidas las referidas leyes, una por la que se titula Legislatura y otra por el ejecutivo con autorizacion de aquella; y siendo ambos poderes ilegítimos y nulos, segun los quejosos, deducen que han sido molestados en sus propiedades por autoridad que no es competente. Visto el informe que con arreglo al artículo 9º de la ley de la materia rindió la autoridad ejecutora, en el que esta renuncio á informar sobre hechos y con justificacion, reduciéndose por lo mismo, á hacerlo sobre la cuestion de ley. Visto lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal, las pruebas rendidas por las partes, y por último, lo alegado por ellas con lo mas que ver se debió.

Considerando: que la incompetencia alegada por los quejosos, á pesar de ser absoluta por no reconocer autoridad ninguna en el Ejecutivo y Legislativo del Estado, ni natural ni conferida, por impedirlo preceptos Constitucionales, si reconocen en dichos poderes los medios para decretar impuestos y hacerlos efectivos como acontece respecto de las leyes cuyos efectos se ha solicitado se suspendan; que por esta razon el Juzgado dió entrada y continuó por sus trámites legales este recurso, sin ser de atenderse en virtud de estas razones, lo expuesto por el Ciudadano Promotor fiscal en su pedimento de fojas 44, que solicita se niegue el presente juicio y se declaren usurpadores del poder público á dichas autoridades, y

comprendidas en el artículo 59 de la ley de 5 de Diciembre de 1856.

Considerando: que siendo la base y fundamento de este juicio la incompetencia objetada al Ejecutivo y Legislativo del Estado, para decretar impuestos, por no ser constitucionales dichas autoridades, es indispensable examinar, primero: si deben considerarse comprendidas en el espíritu del artículo 16 de la Constitución general, y segundo: si su elección es constitucional y legítima.

Considerando, respecto del primer punto: que la falta de competencia objetada, como se ha dicho, siendo absoluta, no reconoce en ellas sino el mero hecho de existir; pero sin poder ó autoridad para gobernar y poner en ejecución las leyes, es decir, sin competencia; y estableciendo el artículo 16 de la Constitución que nadie puede ser molestado en su familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, etc., es evidente que el presente caso debe tomarse comprendido en el artículo constitucional, que no distingue la clase de competencia á que él se refiere, sino que habla de una manera absoluta.

Considerando, en cuanto al segundo punto: que resulta probado, primero, que el C. Julio M. Cervantes, era gobernador Constitucional en el cuatrienio anterior al actual, que terminó en 15 de Diciembre de 1871, (artículo segundo de los transitorios de la Constitución local, fojas 74) según aparece del decreto de 31 de Mayo de 1871, fojas 22; segundo: que en 31 de Diciembre de 1871, fué declarado igualmente gobernador constitucional del Estado, el propio C. Julio M. Cervantes, como consta del dictámen de la comisión, discusión de él en la Legislatura del Estado, (fojas 64 á 68) y del decreto de la propia Legislatura fojas 52 y 69.

Considerando: que previniendo el artículo 77 de la Constitución del Estado, fojas 74, que ni el gobernador ni el vice gober-

nador puedan ser reelectos sino hasta el año cuarenta de haber cesado en sus funciones; entendiéndose también que el primero no puede ser reelecto para lo segundo, ni el segundo para lo primero; es claro que al haber sido declarado Gobernador constitucional del Estado el C. Julio M. Cervantes, por la legislatura, en 30 de Diciembre de 1871, se infringió palmariamente el artículo citado de la Constitución local, por haber concluido el período constitucional el primero de Octubre de 1871, según el artículo 78 de la propia Constitución, en cumplimiento de cuyo precepto se procedió á hacer la elección de Gobernador en el citado año de 1871.

Que existiendo en la elección del Gobernador del Estado, un vicio constitucional tan claro, su nombramiento no puede tenerse como legítimo, al estar prevenido en el artículo 41 de la Constitución general, el que el pueblo ejerza su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia, y por los de los Estados para lo que toca á su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos en la Constitución federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir á las estipulaciones del pacto federal; así pues, de admitir como legal tal declaración, sería infringir el artículo citado, destruyendo al mismo tiempo por su base el sistema representativo popular, garantizado á la Nación por el pacto federativo, (artículo 109).

Considerando, por último, respecto al poder ejecutivo del Estado: que de surtir sus efectos las leyes contra las cuales se ha interpuesto el presente recurso, se violaría en los quejosos la garantía otorgada al ciudadano por el artículo 16 de la Constitución local.

Considerando, con relación á la Legislatura del Estado: que si bien es cierto que el artículo 36 de la Constitución local previene, que los Distritos alternen en el uso de la facultad que les concede el artículo 35,

que es la de nombrar otro diputado mas que el que los corresponda según su poblacion, si resultare una fraccion que excediese ó llegase á la mitad de la base de poblacion para poder elegir representantes; y que así mismo está probado en autos, que el Distrito de Amecalco eligió dos representantes á la Legislatura anterior, y en la actualidad existen igualmente en la Legislatura dos diputados por el mismo Distrito, sin que por lo tanto se hubiera cumplido con el precepto que establece el artículo 26 citado; es igualmente cierto que no se fijó por la autoridad respectiva, al hacerse la convocatoria para las elecciones, el Distrito que habia de gozar de la prerrogativa del artículo citado; y que una vez electo, conforme al artículo 40 de la Constitucion local que es el correlativo del 60 de la Constitucion federal, á la Legislatura tocaba únicamente calificar la eleccion y resolver la duda que en el caso existiese; resuelta esta, no puede considerarse á ese II. cuerpo instalado sin el *quorum* legal al haber estado presentes á dicho acto tan solo los cinco representantes del Distrito del Centro y los dos de Amecalco, número indispensable para formar *quorum*.

Considerando, por último: que en el presente caso no puede tenerse como atacada la soberanía garantizada por la Constitucion federal á los Estados, al examinarse y resolverse si existe violacion de garantía, pues dicha soberanía se encuentra restringida por la misma Constitucion que impone á los Estados la forma de gobierno republicano, representativo popular, garantizando así los derechos del hombre que son la base y objeto de la institucion, (artículo 19 de la Constitucion general). Por estas razones y con fundamento de los artículos 16, 40, 41, 60, 101, 102, 109 y 126 de la Constitucion general, y de la ley de 20 de Enero de 1869, definitivamente fallando, se declara: Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Próspero C. Vega y á los por él representados, contra los

efectos de las leyes de 24 de Febrero y 29 de Mayo próximo pasado, expedidas la primera por el C. Gobernador del Estado, y la segunda por la Legislatura del mismo.

Notifíquese, sáquense las copias respectivas para los efectos legales, y elévense estos autos en revision á la Suprema Corte de Justicia, previniéndose al actor reponga con el del sello correspondiente, el papel comun invertido. El C. Lic. Victor de la Peña, Juez de Distrito en el Estado, así en definitiva lo decretó, mando y firmó.—Doy fé.—*V. de la Peña*.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Escopia. Querétaro, Febrero 10 de 1873.—*Francisco Ruiz*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Agosto 29 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Lic. Próspero Vega, en nombre y representacion de los causantes de contribuciones que en el poder por ellos otorgado se expresa, contra los efectos de las leyes de Hacienda del Estado de Querétaro de 24 de Febrero y 29 de Mayo del año próximo pasado, por reputar violada la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion general, en virtud de que fueron expedidas por el Gobierno y la Legislatura de dicho Estado que no ejercen autoridad legítima; y

Considerando: que los quejosos alegan como causas de ilegitimidad respecto de la Legislatura, que se instaló sin que hubiera el numero de diputados necesario para formar *quorum*; y respecto del Gobernador, que el C. Julio Maria Cervantes fué declarado Gobernador contra lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitucion del Estado, que prohíbe la reeleccion, y que á este punto debe limitarse la resolucion del amparo solicitado; que la Legislatura se instaló con sie-



te diputados, número que forma el *quorum* de ella; que si en las elecciones de Diputados por el Distrito de Amealco hubo vicios, constando que realmente fueron electos por tal Distrito, solo á la Legislatura del Estado toca, como cuerpo electoral, calificar y apreciar estos vicios: que si al hacerse la declaración de Gobernador, la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitución del Estado; esta infracción por si sola no puede ser objeto de amparo de garantías, sino de apreciación de la misma Legislatura como cuerpo electoral. Por todas estas consideraciones y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: 1º que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Queretaro que amparó á los quejosos; 2º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Próspero C. Vega y á los por él representados, contra los efectos de las leyes de 24 de Febrero y 29 de Mayo del año próximo pasado, expedidas por el Gobernador y la legislatura del Estado de Queretaro.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Añza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 20 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## JUICIO

*Que ha promovido en el Juzgado 2º de Distrito de México el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante, contra la hacienda pública, sobre el pago de la cantidad de veinticinco mil pesos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio que ha promovido el Dr. D. Javier Aguilar y Bustamante, contra la hacienda pública, sobre el pago de la cantidad de veinticinco mil pesos, que dice haberle prestado al extinguido convento de San Agustín, con hipoteca de la casa número 5 de la calle del Niño Perdido, supuesto el estado del juicio, ante V. dice: que ha recibido dos instructivos; el uno con fecha tres del corriente, en que se le hace saber la sentencia definitiva, por la cual se declara, que la hacienda pública es deudora al expresado Dr. Aguilar, de la cantidad que le demanda, sin causa de réditos ni el pago de las costas causadas en el juicio; y el segundo instructivo le impone de las dos comparecencias puestas por el repetido Aguilar, que habiéndose conformado primero con el fallo, apeló despues de él por no estar conforme sobre el punto de costas.

El que suscribe en cumplimiento de su deber, tiene que ejercitar el recurso de alzada contra la resolución que declara deudor al fisco del valor de la escritura en que se apoya la demanda, por serle perjudicial, supuesto que importa la declaración de que los derechos del demandante, son enteramente legítimos en contra de la hacienda pública; pues si el que suscribe propuso por vía de avenimiento una transacción en los términos que se espresan en la junta celebrada ante ese Juzgado, no importa el reconocimiento absoluto de la justicia del Padre Aguilar, quien rehusó tal propuesta, quedan-